

Escuela de Gobierno
Alberto Lleras Camargo

Apuntes de Gestión y Políticas Públicas

Esta serie busca visibilizar y poner en el debate público discusiones sobre instrumentos, ideas y recomendaciones de política que se alimentan desde nuestra propia investigación, desde la experiencia de los hacedores de política y expertos, y desde la literatura de punta en el campo de los asuntos públicos: la gestión y las políticas públicas. Tiene un enfoque de coyuntura y busca contribuir con lecciones, aprendizajes, ideas e instrumentos de política a una discusión amplia entre academia, actores estatales y sociedad civil sobre potenciales respuestas a ingentes problemas colectivos y sociales.

Junio de 2020 | No. 03

Más y mejores transferencias monetarias en tiempos de COVID-19

Yadira Díaz

Investigadora posdoctoral de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes

Liliana Narváez

Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana

f |  |  | **GobiernoUAndes**

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia

Contexto

La pandemia del COVID-19 confirmó su primer caso en Colombia el 6 de marzo de 2020. Desde la llegada del virus al país, tanto el Gobierno nacional como los gobiernos locales han tomado una serie de medidas de aislamiento para la prevención de la pandemia. El 18 de marzo Bogotá inició un simulacro de aislamiento que fue seguido por confinamiento obligatorio en todo el territorio nacional (Decreto 457 de 2020). A la fecha se tiene previsto que culmine el 1° de julio.

Durante este aislamiento preventivo, el Gobierno nacional y las principales entidades territoriales han puesto en marcha una serie de medidas de asistencia social que buscan contrarrestar los efectos económicos que la cuarentena inflige sobre la población pobre y vulnerable. Dentro de las diferentes políticas implementadas se contemplan transferencias monetarias y ayudas en especie. Mientras que las estrategias de cobertura nacional se centran exclusivamente en transferencias monetarias, los programas locales han preferido una estrategia mixta de entregas.

Sumando medidas, tanto nacionales como de las principales ciudades del país, se espera que cerca de 8,2 millones de hogares colombianos reciban transferencias monetarias. Si estas transferencias se logran focalizar, asegurando una única familia por transferencia, podrían llegar a representar más de 50 % de los hogares colombianos. Asimismo, alrededor de 2,1 millones de hogares recibirán transferencias en especie en forma de mercados o bonos canjeables.

Dando un balance a la fecha, tanto el esfuerzo nacional como el territorial ha sido significativo; sin embargo, es importante preguntarse: ¿cómo podemos mejorar los esfuerzos de asistencia para reducir el impacto económico de la pandemia en la población más pobre y vulnerable? Esta nota presenta parte de la evidencia nacional e internacional más relevante al respecto, analiza la focalización y tamaño de las transferencias monetarias a la luz de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y presenta recomendaciones para el contexto específico colombiano.

En esta edición

Camilo Andrés Ayala Monje, diagramación
Angélica Cantor Ortiz, corrección de estilo



¿Por qué transferencias monetarias?

El favoritismo de transferencias monetarias sobre otras modalidades se fundamenta en la habilidad que estas tienen para responder a las necesidades y preferencias de los beneficiarios, así como en su habilidad para impulsar los mercados locales, mientras se cumple con los objetivos específicos de cada programa.

Ahora bien, es claro que no existe una regla universal que pueda ser aplicada al momento de diseñar un programa de transferencias monetarias y que, consecuentemente, garantice su efectividad. Pero sí existe a nivel global una cantidad significativa de evaluaciones a intervenciones en contextos de emergencia que compara transferencias monetarias y en especie, y que demuestra las ventajas de una sobre la otra.

Por ejemplo, para el caso de la República Democrática del Congo, Bailey y Walsh (2007) comparan la cantidad de dinero gastado en bienes no alimentarios versus los elementos incluidos en una canasta de ayuda humanitaria y encuentran que tan solo 8 % del dinero recibido en la transferencia monetaria fue gastado en elementos de esa canasta. Mientras las **transferencias monetarias han demostrado ajustarse mejor a las necesidades y preferencias de los beneficiarios**, las transferencias en especie se tornan rígidas y no necesariamente suplen las necesidades del contexto específico de cada hogar.

Asimismo, las evaluaciones de impacto han demostrado que **las transferencias monetarias en comparación con las transferencias en especie resultan ser más costo-efectivas**. Al respecto, Hoddinott *et al.* (2014) encuentran para el caso de Níger que las transferencias en especie representan un costo operativo 15 % mayor al de las transferencias monetarias, lo que sugiere que el valor de la transferencia podría haberse incrementado en 15 % o que el programa podría haberse expandido a un 15 % adicional de población si no se hubiera implementado a través de transferencia en especie.

En el caso particular de **seguridad alimentaria y nutrición, algunos entes territoriales colombianos han justificado el uso de transferencias en especie como herramienta para garantizar la seguridad alimentaria**. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que las transferencias monetarias tienen efectos significativos tanto en frecuencia, como en diversidad alimentaria. Por ejemplo, para Etiopía y Kenia los estudios encuentran que las transferencias monetarias son más efectivas que la ayuda alimentaria en especie para aumentar la frecuencia y la diversidad de la dieta. No obstante, cuando se tienen objetivos de ingesta de micronutrientes particulares para mejoras nutricionales, las transferencias en especie demuestran tener una ventaja significativa en cumplir este objetivo, pues aseguran la ingesta de micronutrientes específicos (Jaspars y Harvey, 2007; Dunn, 2009).



En este caso, Skoufias *et al.* (2011) encuentran que la modalidad más efectiva para cumplir con objetivos nutricionales tan específicos es la combinación de efectivo y alimentos. Este sería el caso apropiado para contextos de desnutrición crónica.

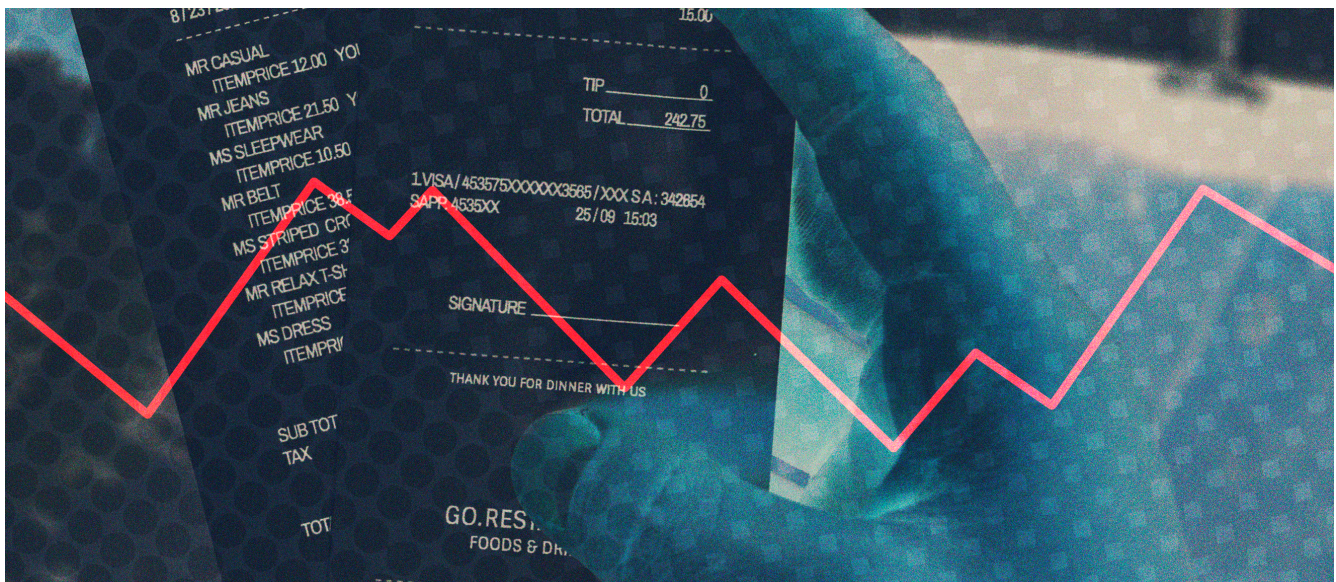
En términos de consumo, la **experiencia internacional indica que las transferencias monetarias no son invertidas en gastos innecesarios**. En Colombia la evaluación del programa Familias en Acción en los grandes centros urbanos encontró que la transferencia monetaria se gastaba en su gran mayoría en cuentas pendientes, pago de servicios, alimentación, transporte y pago de arriendo, entre otros (Núñez, *et al.*, 2011).

Un argumento a favor de las transferencias en especie es que estas mejoran la solidaridad comunitaria (Harvey y Morongwe, 2006; Kardan *et al.*, 2010). Sin embargo, esto se debe a que muchos de los productos entregados pueden ser no deseados o requeridos por el hogar, de forma que prefieren donarlos o los intercambiarlos antes que consumirlos. Procesos de intercambio de este tipo pueden ser engorrosos y dificultarse más ahora en tiempos de COVID-19, trayendo consigo desperdicio y pérdida de productos. No obstante, **las transferencias monetarias también tienen la capacidad de estimular la solidaridad teniendo un efecto multiplicador mediante préstamos o transferencias entre los hogares y, por su puesto, estímulo a los mercados locales**. El estímulo a la economía local viene de los gastos en negocios independientes que consecuentemente impactan positivamente a la comunidad. Dunn (2009) encuentra para Kenia que las transferencias

monetarias permitieron a los vendedores locales expandir sus negocios. A su vez, Angelucci y De Giorgi (2009) para Progresá en México encuentran que las transferencias monetarias aumentan indirectamente el consumo de los hogares no beneficiarios que habitan en la misma comunidad.

En un contexto de emergencia, es muy probable que las transferencias monetarias se gasten en consumo inmediato. Sin embargo, este tipo de ayudas en contextos en los cuales la situación no es aguda, o también cuando el total pagado es lo suficientemente grande, **pueden promover el ahorro y la inversión productiva con efectos de largo plazo** (Aklilu & Wekesa, 2002). Por ejemplo, para el caso de Ghana, Peppiatt y Holzman (2001) encuentran que los beneficiarios de este tipo de transferencias no gastaron inmediatamente la totalidad del dinero y algunos invirtieron en actividades que incrementaban la productividad. A su vez, Hodinott *et al.* (2014), para Níger, encuentran que los beneficiarios emplearon algunos de los recursos de las transferencias monetarias en la inversión de insumos agrícolas con potenciales efectos de largo plazo. O'Donnel (2007) encuentra para Kenia que transferencias monetarias que se programaron como alivio de una sequía grave, pero que llegaron a los hogares cuando la situación era menos grave, fueron en 85 % de las veces utilizadas en inversiones productivas.

Muchas de estas lecciones aprendidas y resultados de otros contextos pueden usarse como referencia para el contexto colombiano y para la actual crisis con ocasión de la COVID-19.



Focalización: cálculos a mano alzada

Dos mediciones de pobreza nos permiten hacer seguimiento a las condiciones de vida de la población en Colombia. La primera, es de carácter monetario, usa como medida de ordenamiento de los hogares el ingreso per cápita del hogar y clasifica como pobres aquellos que no alcanzan un ingreso de al menos \$COP 257.433 por persona, de 2018.¹ La segunda, es de carácter multidimensional y usa como indicador de ordenamiento de los hogares la suma ponderada de quince privaciones a nivel del hogar. Aquellos hogares que registran más de 33 % de esta suma ponderada se consideran multidimensionalmente pobres. De acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en 2018, en Colombia, 27 % de la población vivía en un hogar pobre monetario y el 19,6 % en un hogar pobre multidimensional. Mientras la medición de pobreza monetaria tiende a capturar el comportamiento del ciclo económico en los hogares, la medición de pobreza multidimensional da cuenta de carencias de tipo estructural que limitan las oportunidades de los miembros del hogar. Para los propósitos de esta nota, replicamos estas dos mediciones oficiales sobre la GEIH 2018² y analizamos, a grandes rasgos, la focalización de los programas de transferencias monetarias que han surgido en el país como respuesta a la crisis.

De acuerdo con nuestras estimaciones, 10,9 % de la población en Colombia se encuentra en condición de pobreza monetaria y multidimensional simultáneamente (ver tabla 1). Esta es la población que registra el nivel más alto de privación. Es decir, es aquella que se encuentra, tanto en la parte baja de la distribución de ingresos como en la parte alta

de la distribución de privaciones no monetarias. Por consiguiente, este es el grupo poblacional que debería ser priorizado como objeto de asistencia en momentos de crisis, pues muy probablemente sufrirá los efectos más devastadores dadas sus condiciones de precariedad incluso antes de la crisis.

Tabla 1. Proporción de población pobre monetaria y multidimensional

Pobreza monetaria	Pobreza multidimensional		
	No pobre	Pobre	Total
No pobre	84,8	15,2	100
	79,3	50,5	73,0
Pobre	61,9	11,1	73,0
	59,8	40,2	100
Total	20,7	49,5	27,0
	16,1	10,9	27,0
	78,0	22,0	100
	100	100	100
	78,0	22,0	100

Fuente: cálculos propios con base en GEIH, 2018

Las principales medidas que el Gobierno nacional ha implementado como respuesta a la crisis parten de los programas de transferencias actualmente existentes: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. De acuerdo con la GEIH, esto representa 17,1 % de los hogares colombianos.³

¹ A la fecha no existe un valor oficial de línea de pobreza para 2019. Actualizando a groso modo el valor de 2018 con el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor, la línea de pobreza de 2018 equivale a \$COP 267.215 pesos de 2019.

² A pesar de que a la fecha la GEIH 2019 se encuentra disponible para el público, el consolidado del ingreso per cápita del hogar e incidencia de pobreza monetaria solo están disponibles para 2018. Razón por la cual, para los propósitos de esta publicación, usamos la GEIH 2018. En términos de pobreza monetaria, nuestros cálculos replican con exactitud la incidencia de pobreza oficial. Ahora, para el caso de pobreza multidimensional, la GEIH no permite una replica equivalente a la cifra oficial por ausencia de algunas de las variables necesarias. En consecuencia, la incidencia de pobreza multidimensional se calcula a partir de una proxy que hace uso de la información disponible en la GEIH y revela que, en 2018, 22 % de la población se encuentra en condición de pobreza multidimensional, cifra 2,4 puntos porcentuales por encima de la oficial.

³ Este 17,1 % puede estar subestimando la cobertura de estos programas debido al subreporte probablemente existente en la GEIH. De hecho, la página de datos abiertos del gobierno reporta para 2019 un total de 2,7 millones de familias beneficiarias de familias en acción, lo que significaría un 17,5 % hogares. Cifra que dista en 0,4 puntos porcentuales de la registrada por la GEIH para los tres programas.

Sin embargo, al analizar quienes reportan contar con por lo menos alguno de estos programas con respecto a los grupos que normativamente resultan prioritarios, observamos que estas ayudas no están necesariamente concentradas en la población que sufre el mayor número de privaciones al mismo tiempo (ver tabla 2). Del total de hogares en el país, 7,5 % es considerado pobre por ingreso y multidimensional al mismo tiempo. De estos, 56,8 % no recibe ninguno de estos tres beneficios. Si estos tres programas cubren

17,1 % de los hogares, el escenario más deseable sería que 7,5 % de población más pobre en el país estuviese cubierto allí. De hecho, uno esperaría que estos tres programas cubrieran, por lo menos, los tres primeros grupos de la tabla 2, los cuales representan 17,3 % del total. No obstante, de esta población solo 33,2 % reporta recibir transferencias monetarias por cuenta de alguno de estos tres programas. Es decir, 66,8 % de esta población se encuentra excluida de estos beneficios.

Tabla 2. Proporción de hogares que recibe por lo menos una transferencia monetaria (Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Adulto Mayor) por grupo de pobreza

Por lo menos una transferencia monetaria

	No	Sí	Total
1. Pobre multidimensional y pobre monetario	56,8 5,2	43,2 19,0	100 7,5
2. Pobre multidimensional y vulnerable o clase media monetaria	69,5 6,4	30,5 13,5	100 7,6
3. Pobre multidimensional exclusivamente	91,9 2,4	8,2 1,0	100 2,2
4. Pobre monetario exclusivamente	68,2 11,5	31,8 26,0	100 14,0
5. Vulnerable o clase media monetaria exclusivamente	80,8 28,6	19,2 33,0	100 29,4
6. No pobre, no vulnerable	96,8 45,9	3,2 7,4	100 39,3
Total	82,9 100	17,1 100	100 100

Fuente: cálculos propios con base en GEIH, 2018

Consecuentemente, a pesar de que los resultados de la GEIH no necesariamente corresponden con las cifras oficiales y pueden estar subestimando el número de perceptores de transferencias monetarias por cuenta de estos tres programas, la distribución de perceptores no se concentra necesariamente en la población que sufre mayor privación. Este resultado resalta la necesidad urgente de estudiar a fondo y reconsiderar la focalización de estos tres programas. Nuestros datos no son definitivos, pero sí indicativos de un posible problema que podría mejorarse a la luz de los rediseños venideros para estos programas.

Adicionalmente, con objeto de beneficiar a la población no inscrita en dichos programas, el Gobierno nacional creó el programa Ingreso Solidario, el cual busca cubrir población pobre o vulnerable por ingreso, no cubierta previamente. De acuerdo con la

GEIH, el número de hogares no cubiertos por ninguno de los tres programas principales y que se clasifican como pobre, vulnerable o clase media por ingreso, corresponde a un total de 6,6 millones de hogares, de los cuales el Gobierno nacional planea cubrir tres millones. De acuerdo con la información reportada por el Gobierno, la focalización de estos hogares se hará a través del instrumento de focalización Sisbén-IV, el cual aproxima a través de las características de los hogares y sus miembros el ingreso per cápita del hogar. Sin embargo, dado que no contamos con información precisa de dicho instrumento, asumimos cumplimiento perfecto del criterio, es decir, ordenamos de menor a mayor ingreso per cápita los hogares no cubiertos por ninguno de los tres programas anteriores y seleccionamos como elegibles los primeros tres millones que el Gobierno planea cubrir. El análisis de estos resultados indica

que, dado que el criterio de focalización no incluye población pobre multidimensional, el programa resulta excluyendo aproximadamente 833.000 hogares que sufren condiciones de pobreza multidimensional, de los cuales 64,7 % resulta ser también pobre, vulnerable o clase media monetariamente. Este debería ser el grupo por priorizar dado que es el que sufre de manera simultánea el mayor número de privaciones al mismo tiempo en el hogar (ver tabla 3).

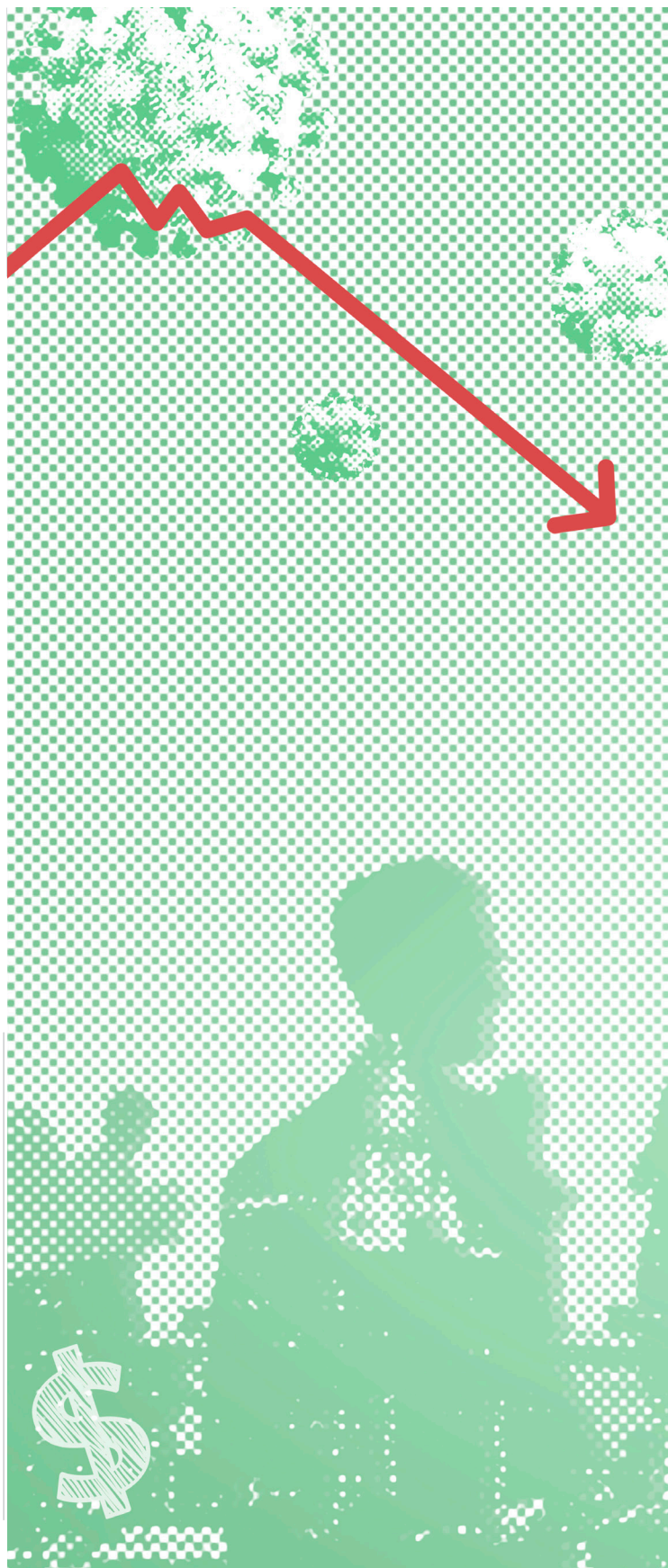
Tabla 3. Efecto potencial de la focalización del programa ingreso solidario

	Elegible ingreso solidario		
	No	Sí	Total
Pobre multidimensional y pobre o vulnerable monetario	538.987 38,6	858.840 61,4	1.397.828 100
Pobre multidimensional exclusivamente	294.467 100	0 0	294.467 100
Pobre o vulnerable monetario exclusivamente	2.901.551 59,6	1.963.633 40,4	4.865.184 100
Total	3.735.006 57,0	2.822.473 43,0	6.557.479 100

Fuente: cálculos propios con base en GEIH, 2018

Estos resultados no sorprenden, pues las dos mediciones de pobreza capturan diferentes tipos de privaciones y, por consiguiente, no necesariamente la población pobre por ingreso es la población pobre multidimensional y viceversa. De hecho, del total de población clasificada como pobre por ingreso, 59,8 % de ella se clasifica como no pobre multidimensional; y del total de población pobre multidimensional 50,5 % se clasifica como no pobre por ingreso.

Finalmente, existen otras medidas como la devolución del IVA y medidas como Bogotá Solidaria o Medellín Me Cuida. En estos dos últimos casos, los gobiernos locales han incluido dentro de sus criterios de focalización las dos mediciones de pobreza (monetaria y multidimensional), lo que, bajo el escenario de cumplimiento perfecto, resultaría no excluyendo población con múltiples privaciones al mismo tiempo.



El monto de la transferencia

Diferentes montos de transferencias monetarias desembocan en impactos diferenciados. El monto de la transferencia debe balancear tanto el alcance de los objetivos, como la cantidad de población a cubrir. Mientras un monto muy bajo puede afectar la consecución de los objetivos, un monto muy alto puede conducir a que la cobertura sea restringida.

Para el caso colombiano, el ingreso per cápita promedio mensual (una vez descontando el ingreso por transferencias monetarias institucionales) que le hace falta a un hogar pobre monetario, en promedio, para no permanecer en condición de pobreza corresponde aproximadamente a \$COP 156.000 de 2019. Ahora, si este hogar pierde 5 % de su ingreso en un mes, entonces el ingreso que requería para no permanecer en condición de pobreza sería

aproximadamente \$COP 162.000. En este caso, un ingreso adicional de alrededor de \$COP 160.000, como el propuesto por el programa Ingreso Solidario, correspondería a un valor muy similar. Sin embargo, este es un valor en términos per cápita y mensual. Esto significa que apenas corresponde a la tercera parte del ingreso que requiere, en promedio, un hogar clasificado como pobre para no permanecer en esta condición en un mes determinado.

Ahora bien, en un escenario de recursos escasos, cubrir 100 % de la brecha de ingreso del hogar por un periodo de tiempo prolongado puede ser no factible o ir en contravía de expansiones necesarias en cobertura. Es aquí cuando criterios de eficiencia y equidad deben ir de la mano para lograr con los recursos disponibles el mayor efecto posible.

Conclusiones y recomendaciones de política

La evidencia señala un mejor desempeño de las transferencias monetarias sobre las transferencias en especie, esto es en términos de costo-efectividad, respeto por las preferencias de los hogares, menor probabilidad para ser capturadas por élites de productores específicos, mayor soporte a mercados locales y efectos de derrame sobre población no beneficiaria. La pregunta relevante no es si las transferencias monetarias son una forma adecuada para llegar a aquellos más afectados por la crisis, sino cómo mejorar las transferencias para potenciar su efecto. A pesar de la evidencia contundente que documenta los mayores beneficios

de las transferencias monetarias con respecto a los beneficios que pueden traer consigo transferencias en especie, aún muchos gobiernos locales en Colombia han optado por transferencias en especie sobre transferencias monetarias. La información reportada por los diferentes gobiernos locales da cuenta de por lo menos 2,1 millones de hogares receptores de transferencias en especie. **Estos recursos podrían ser aprovechados de mejor manera si se priorizaran las transferencias monetarias sobre ayudas en especie**, pues se podría expandir la cobertura sobre hogares excluidos o mejorar el monto de la transferencia que los hogares están recibiendo.

Lo anterior, sin perder de vista que las transferencias monetarias no son necesariamente pertinentes en todo contexto. Una transferencia monetaria es pertinente cuando las necesidades de los potenciales beneficiarios lo ameritan y el funcionamiento de los mercados permite la absorción de la inyección de efectivo. En la coyuntura actual colombiana estas dos condiciones demarcan la pertinencia de este tipo de medidas. No obstante, una posible barrera para la implementación y expansión de transferencias monetarias es la bancarización y su fragmentación a través de diferentes programas. Sea esta entonces la oportunidad de **expandir el sistema de bancarización para la población más pobre y vulnerable, y mejorar la interoperabilidad de los diferentes programas de transferencias monetarias existentes en el país**. El fin último sería la consolidación de un sistema unificado de transferencias monetarias en el país.

El análisis de la GEIH muestra que los principales programas de transferencias monetarias que el Gobierno nacional tiene en curso no necesariamente cubren a la población que experimenta el mayor número de privaciones al mismo tiempo. Nuestros cálculos señalan que, del total de población pobre por ingreso y pobre multidimensional al mismo tiempo, alrededor de 57 % no recibe beneficios de los tres programas de transferencias más importantes del país. A su vez, programas como Ingreso Solidario excluyen a más de 800.000 hogares multidimensionalmente pobres. Si estos programas cubren más de 17 % de los hogares colombianos, el escenario más deseable es que se prioricen los hogares que sufren el mayor número de privaciones al mismo tiempo. **Nuestras estimaciones subrayan la importancia de analizar a fondo y mejorar el sistema de focalización de los programas de transferencias monetarias nacionales**. Se recomienda que la población focalizada corresponda a aquella que sufre el mayor número de privaciones de manera simultánea y aquella que tenga mayor vulnerabilidad de caer en condición de pobreza. De esta forma, el esfuerzo tan importante que el gobierno hace en materia de transferencias monetarias se podría ver mejor reflejado en reducciones en incidencia de pobreza monetaria y multidimensional.

De otro lado, en términos del monto de la transferencia, valores de transferencia altos asegurarían que los hogares no entren en condiciones de pobreza o pobreza extrema; sin embargo, también valores altos pueden limitar la posibilidad de expandir la cobertura a hogares no cubiertos que podrían catalogarse como elegibles. Entonces, **teniendo en cuenta la escasez de recursos, se recomienda conciliar criterios de eficiencia y equidad para lograr con los recursos**

disponibles el mayor efecto posible, no solo a través de impactos directos, sino también de impactos indirectos dados por externalidades que en el contexto particular pueden cobrar más relevancia.

Ahora bien, si bien es cierto que transferencias diferenciales por tamaño de la necesidad que enfrenta el hogar, pueden representar mayor dificultad operativa, también permiten ajustar, de mejor manera, la respuesta del Gobierno a las necesidades de la familia y mejorar la efectividad de los programas. En este sentido, se recomienda el **análisis e implementación de transferencias monetarias que den cuenta de manera diferenciada de la magnitud de la privación que enfrenta el hogar**, descrita esta en términos de la composición demográfica y la profundidad de las privaciones que experimenta.



Finalmente, la elaboración de esta nota requirió información de las medidas nacionales y locales, sus metas y sus criterios de focalización. Esta información se encuentra fragmentada e incompleta a través de diferentes medios informativos o páginas oficiales que no facilitan su análisis. Información más accesible podría mejorar significativamente la contribución que sectores como la academia y los diferentes centros de pensamiento pueden tener sobre el análisis y debate de las ideas conducentes a un mejor diseño e implementación de política social. En este sentido, **la transparencia y menores barreras de acceso a la información para el análisis y evaluación de políticas públicas cobra cada vez mayor relevancia para el proceso de construcción colectiva** sobre el cual queremos contribuir.

Referencias

- Aklilu, Y. y Wekesa, M. (2002). *Drought, livestock and livelihoods: lessons from the 1999-2001 emergency response in the pastoral sector in Kenya*. London: ODI.
- Bailey, S. y Walsh, S. (2007). The Use of Cash Transfers in Emergency and Post-Emergency Non-Food Item Programs. *Journal of Humanitarian Assistance*.
- Dunn, S. (2009). *External evaluation: fresh food voucher project by action against hunger dadaab refugee camps, Kenya.*, Action Against Hunger.
- Harvey, P. y Bailey, S. (2011). Cash transfer programming in emergencies. *Good Practice Review*.
- Harvey, P. y Marongwe, N. (2006). *Independent Evaluation of Oxfam GB Zambia's Emergency Cash-Transfer Programme*, ODI for Oxfam.
- Jaspars, S. y Harvey, P. (2007). A Review of UNICEF's Role in Cash Transfers to Emergency-Affected Populations. *EMOPS Working Paper*.
- Kardan, A. (2010). *Evaluation of Zimbabwe's Emergency Cash Transfer (ZECT) Programme*: Concern Worldwide and Oxford Policy Management.
- Núñez, J., et al. (2011). *Evaluación del programa Familias en Acción en grandes centros urbanos*, S.I.: Centro Nacional de Consultoría.
- O'Donnell, M. (2007). *Cash-Based Emergency Livelihood Recovery Programme*.
- Peppiatt, D. M. J. y Holzmann, P. (2001). *Cash-transfers in emergencies: evaluating benefits and assessing risks*, ODI.
- Skoufias, E., Tiwari, S. y Zaman, H. (2011). *Can we rely on cash transfers to protect dietary diversity during food crises? Estimates from Indonesia*, Banco Mundial.



Yadira Díaz

Investigadora postdoctoral de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Doctora en Economía de la Universidad de Essex en Inglaterra. Hace parte del equipo investigador del proyecto Chances-6, conducido por el London School of Economics, la Universidad de Cape Town, el King's College de Londres y la Universidad de los Andes.

Se desempeña en el área de economía aplicada. Su investigación se enfoca en temas de medición de pobreza y bienestar, economía de la salud y desarrollo regional. Actualmente es miembro del Comité de Expertos Colombianos en Medición de Pobreza Monetaria y Multidimensional. Cuenta con más de quince años de experiencia trabajando como consultora internacional para gobiernos de países en desarrollo, con organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Liliana Narváez

Doctora en Ciencia Política de Brunel University London, magíster en Política Comparada de la Universidad de Essex en Inglaterra, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes y politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Su investigación se centra en el área de relaciones internacionales. En particular, en estudios de conflicto y democracia, desigualdades horizontales y verticales, con énfasis en políticas de inclusión política y social.